Universidad y Cambio de Siglo



EL PAPEL POLÍTICO Y SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES

Godofredo Aguillón

75

Las áreas en las que las universidades podrían jugar un papel político y social, desde sus quehaceres académicos, son las siguientes:

- 1. Promotor y defensor del cambio social, económico y político.
- 2. Fiscalizador y crítico al sistema político.
- 3. Difusor de respeto y defensa del Estado de Derecho.
- 4. Propulsor de una sociedad moderna.
- 5. Agente propositivo de alternativas viables para la sociedad.

Con este punteo de áreas no se pretende agotar ni mucho menos la capacidad y creatividad de las universidades en distintos renglones de la vida nacional, sólo se persigue mostrar cuán importante es la función que deben desempeñar los centros de educación superior en la sociedad, atendiendo y dándole tratamiento desde sus especificidades propias a los aspectos de mayor gravitación en el país. Un modesto pero interesante papel en las áreas política y social deben ser asumidas como retos impostergables para el futuro. La premisa que sustenta nuestro punto de vista radica en señalar que las universidades no son mundos encerrados per se y reproductoras de conocimiento circular, sino que en tanto forman parte importante de la sociedad están abiertas a ella con sus encuadramiento y prefiguraciones, pero tratando de concitar transformaciones desde sus cimientos y estructuras hasta las formas institucionales menos insospechadas que requieren de cambios para beneficio de la población.

Licenciado en
Economía,
Universidad
Politécnica.
Maestría en
Sociología,
Universidad
Iberoamericana.
Investigación
UTEC.

1. PROMOTOR Y DEFENSOR DEL CAMBIO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

La universidad como parte sustantiva de la sociedad no puede sustrarse a la dinámica que experimenta ésta, ni mucho menos ser ajena a los derroteros que marcan la dirección correcta de las mutaciones necesarias e inevitables, so pena de divorciarse de los intereses societales y de cumplir una función vital para su desarrollo.

Como espacio privilegiado del conocimiento y su recreación, la universidad está convocada desde su visión académica a rechazar en absoluto modalidades de cambio violento- léase revolucionarios- para alentar, en su lugar, desde las tendencias y circunstancias actuales, los inevitables cauces que exigen una renovación o transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas, según las exigencias históricas validadas por un acervo de necesidades generales que comprometen la

vida de lo más elemental de las sociedades: sus integrantes. En este camino, por supuesto, no dejan de sorprender ni de actuar las viejas y denostadas estructuras convertidas en parásitos de la sociedad que se resisten a su obsolescencia; sin embargo, es aquí donde las universidades pueden y deben ser infranqueables, implacables y hasta insobornables, para no permitir ni languidecer ante un proceso involutivo que ponga en cuestión lo que tanto a costado a la sociedad y sus actores fundamentales. No son los intereses de unos pocos los que deben privilegiarse sino el de toda la población presente y futura, proporcionando las condiciones necesarias exigidas por los cambios que demanda la sociedad en su conjunto.

Renunciar a los cambios económicos, sociales y políticos es faltar a una demanda social que se exige a las universidades en el ámbito académico, cual es el de ser una auténtica interpretadora de esos cambios y tener la capacidad imaginativa de aprovechar los mismos para el bienestar de la población y de la sociedad. Excluirse de lo cambios es la antesala del encierro academicista improductivo que vuelve estéril el pensamiento y la acción estratégica de las universidades. Sería poco serio y responsable que éstas estuvieran al margen de los que discurre en el país, sin opinar ni argumentar sobre cuestiones decisivas y sensitivas que comprometen los intereses nacionales en todos los ámbitos de la vida social. Seguir de cerca los acontecimientos que gravitan en la sociedad e indicar y ponderar sus cauces, definiciones, contornos y consecuencias, las vuelve portadoras de su verdadera identidad institucional al estar comprometidas con la pluralidad de actores y sus inquietudes, proporcionándoles un análisis verídico de su entorno para solventar sus necesidades vitales de manera justa.

Desde esa perspectiva, se vuelve necesaria –que no suficiente– la participación de las universidades en las transformaciones que demanda la sociedad, aportando desde su aureolada función de generar conocimiento y reflexión crítica un inequívoco servicio al conglomerado social, sirviéndose de los más caros valores de justicia, igualdad y solidaridad como parte de su identidad académica y para saber aplicarlos en su accionar en-y-con-lacomunidad. Desechar de su ideario intereses egoístas que buscan secuestrar a la sociedad, es defender no sólo los cambios anhelados por amplios sectores de la población sino desvelar quiénes pretenden mantener los privilegios de otrora para seguir mancillando el porvenir de muchos que han exigido y siguen exigiendo justicia social y democratización real en todos los campos de la vida social.

Las universidades no pueden obnubilar los cambios que irrumpen por necesidad histórica, así como tampoco deben obcecar a los distintos sectores de la vida nacional de lo inevitable, pretendiendo evadir su responsabilidad de ser conciencia crítica de la sociedad. Difundir y evaluar con sentido crítico desde sus entrañas académicas esos cambios, las convierte en multiplicadores de las consecuencias y efectos que devienen necesarios para el país.

Los cambios que requiere el país no se reducen a Terceras vías¹ planteadas en otras latitudes ajenas a nuestras realidades, pero pueden servir para oxigenar los cambios que responden a la realidad de un país subdesarrollado. Los cambios que deben impulsar las universidades deben estar apoyados por reflexiones académicas, que no ideológicas. Observar las tendencias actuales y tener la capacidad para direccionar los cambios debe ser aceptados por las universidades como parte de su labor social y política. Bosquejar y poner atención acerca de la transición política y social que se vive hoy,

llamando fundamentalmente la atención con sentido crítico en los desaciertos que se cometen, es ganarse una imagen académica de compromiso con la sociedad que reclama y exige cambios.

2. FISCALIZADOR Y CRÍTICO AL SISTEMA POLÍTICO

Partiendo del ítem anterior, e inmerso en una realidad que no se reduce a su mínima expresión, las universidades modernas están llamadas a valorar y evaluar el sistema político y a sus actores privilegiados, los partidos políticos, siendo imparciales en las deformaciones y causas de corrupción que carcomen la institucionalidad de la que se sirven esos actores, so pretexto de apropiarse la representatividad popular legitimada por los procesos electorales.

Hoy en día en que se acepta sin ambages que existe una pérdida de credibilidad de los partidos políticos –léase en identidad ideológica (indefiniciones), ausencia de programas de gobierno adecuados a la realidad, divorcio con sus representados, propensión a cometer actos de corrupción, alejados de las necesidades del grueso de la población, etc.,— no se puede dejar a esos abrogarse el derecho de enrumbar el país sin participación de otros actores fundamentales en la vida política nacional. He aquí la oportunidad para que las universidades contribuyan con sus aportes a generar y alentar una cultura democrática de alcance nacional extrapartidario, creando una conciencia cívica que apuntale los puntos endebles de un sistema político anquilosado y puesto en cuestión por los ciudadanos. En este sentido, ser fiscalizador de las desavenencias de las decisiones que enredan al sistema de partidos, podría iluminar las pasiones políticas de los partidos dotando de razón y racionalidad a éstos en momentos de ceguera.

Los partidos políticos son estructuras al servicio de la nación y se deben a todos los electores por más que existan alarmantes niveles de abstención; negar este imperativo los transforma en maquinarias electorales vaciadas de contenido y de representatividad. En esta perspectiva, se trata de poner en cuestión la idea de que "...las autoridades deciden y la sociedad obedece, los políticos dirigen y los ciudadanos caminan"². Las decisiones que se adopten deben pasar por la apertura de las deliberaciones entre los distintos sectores, y en este terreno las universidades tienen mucho que contribuir.

Las universidades como partes del andamiaje social, deben exigir a las estructuras partidarias cumplir con su cometido y procesar las demandas de la ciudadanía para que sean resueltas con imparcialidad y sin fines ideológicos. Obviar de parte de los partidos este reto, da cabida para que las universidades difundan una educación democrática que garantice una cultura cívica con aplomo nacional.

El régimen político igualmente debe ser ponderado con la misma intensidad que somete al sistema de partidos, dado que muchas de las decisiones están ancladas en ese régimen y podrían ser contraprudecentes para la ciudadanía. Ciertamente las universidades están marcadas por la impronta de apolíticas, pero ello no es óbice para denunciar a la opinión pública los síntomas de autoritarismo que pueda experimentar el régimen en determinado momento o cuando las estructuras del Estado no acatan las leyes establecidas. Estar vigilantes a las acciones que devienen perniciosas para la población, es cumplir de parte de las universidades un mandato ético que pauta su vida y su comportamiento social.

Las universidades son por naturaleza apolíticas, por tanto, no pueden politizar la actividad académica confesando una definición ideológica, peor aún alineándose a un partido político en particular y prestándose a colaborar en sus actividades. Seguir este camino es perder su identidad académica para convertirse en correas de transmisión³ de los intereses partidarios. Incitar, en cambio, a estudiar los distintos tipos de conocimientos o doctrinas políticas en sus aulas por medio de la reflexión crítica, no debe permitir equívocos cuando se relaciona con la sociedad a la cual pertenece. Se puede tener conciencia política en la universidad, pero no actividad partidista en su seno y en sus instancias académicas; dejarse guiar por esta última idea es enturbiar su misión frente a la sociedad. La universidad no persigue el poder, sino que lo cuestiona cuando se ejerce de modo arbitrario y autoritario; no entra en alianzas con partidos políticos, sino que desmistifica a éstos con reflexión y conocimiento; no forma parte del sistema político, pero lo pone en cuestión cuando hay distanciamiento con las necesidades de la población y sobre todo cuando las decisiones se pretenden imponer sin participación civil. Estas distinciones apuntan a delinear el verdadero papel que les corresponde jugar a las universidades en la sociedad, principalmente en materia política, habida cuenta que la política no es patrimonio de los partidos ni del Estado, sino de la comunidad política y civil. Si no es aceptado el hecho de que "la ciencia, hoy, es una cuestión de Estado"⁴, al menos debería intentarse hacer algo en esta línea o dejar que las universidades participen con ese mandato al servicio del país.

Por otra parte, en cierta forma las universidades como parte de la sociedad civil necesitan crear sus propios modos de control societal del proceso político, a fin de descentrar ese proceso como zona exclusiva del sistema de partidos o de las esferas estatales, contribuyendo con sus reflexiones académicas a conocer y entender de manera clara ese intrincado problema que envuelve a los partidos, para que la población los asimile de igual modo y según si afectan sus intereses particulares y colectivos.

3. DIFUSORA DE RESPETO Y DEFENSA AL ESTADO DE DERECHO

La institucionalidad del país no puede dejarse a la suerte de las instancias que velan por el respeto a la ley. También las universidades deben un jugar su verdadero papel en este campo de suma importancia para la vida nacional. En principio, deben inculcar entre sus estudiantes una cultura de la legalidad internamente, y hacia la sociedad deben reforzarlo con mayor ahínco para no dejar dudas de su compromiso con el Estado de derecho.

Cuando las circunstancias lo permitan, deben exigir cambios o reformas al cuerpo normativo que pauta el comportamiento de las instituciones y actores, so pena de quedar conformes con un estado de cosas que se vuelve inmóvil per se. Salir en defensa del Estado de derecho - que acepta mutacionessignifica fiscalizar las acciones y actuaciones de los funcionarios públicos que cometen prevaricato para hacer que se cumpla la ley; hacer conciencia a los actores sociales para que se sujeten a las disposiciones legales y actúen de acuerdo a esos límites establecidos; aplicar las normas jurídicas a todo tipo de delitos y, principalmente, asegurar para que sea efectivo el razonamiento de pronta y cumplida justicia.

Tráfico de influencias, licitaciones amañadas, proyectos de ley viciados, actos de corrupción que desfalcan la hacienda pública, enriquecimiento

ilícito, acciones contra leyes ambientales y otras de carácter secundario, etcétera, deben ser denunciadas por la universidades como instituciones defensoras del Estado de derecho. Se debe, igualmente, castigar a legisladores y funcionarios que agreden la moral pública y se mofan de la opinión pública cuando cometen delitos en los que está en juego recursos de la nación. Esto exige desinmunizar a los funcionarios públicos que en momentos determinantes atenten contra su envestidura y mientan a la nación; es necesario, en ese sentido, hacer reformas a la Constitución. Es aquí donde las universidades con sus facultades de derecho deben ser firmes en exigir que se cumpla la ley para que sea justa la impartición de justicia en el país.

4. PROPULSOR DE UNA SOCIEDAD MODERNA

Dado que las sociedades están inmersas en cambios inminentes, lo menos que pueden plantearse con responsabilidad las universidades es anhelar para toda la población una sociedad moderna al servicio de sus necesidades vitales. Ello implica que se abatan gradualmente ciertos problemas estructurales que ensombrecen a las sociedad actual, por ejemplo la pobreza, para ir allanando el camino de contar con una sociedad justa e igualitaria que genere bienestar general, tanto material como espiritual. Plantear la necesidad de una nueva sociedad no deber ser interpretada como una retórica más sin contenido ni visiones a futuro, antes bien implica desde ya ir creando las condiciones de autorrealización de los individuos que integran la sociedad, mediante acciones de política que hundan sus raíces en las causalidades y efectos de las dolencias sociales que afectan al grueso de la población, principalmente para que éstos tengan resueltos los satisfactores sociales junto a una vida digna y humana. No se puede aspirar a tener una sociedad moderna con parcelas grandes de atraso social, político, económico y cultural que impactan de manera dramática a las clases sociales más vulnerables del sistema. Dejar intacto este embudo es perpetuar el subdesarrollo de nuestra nación; significa un porvenir infructuoso para las generaciones futuras y afirmar, con Lampedusa, que necesitamos cambiar para que las cosas sigan igual.

Asumir un papel activo y dinámico para concitar transformaciones en la sociedad, no sólo es necesario sino justo y con sentido solidario por los reclamos históricos que han planteado —en medio de un bregar cruento—muchas generaciones ayer y hoy para tener un país sin exclusiones de ninguna índole, además de ser ético-normativos y con sentido humanista.

Toda América Latina ha estado marcada- unos menos, otros más según sus particularidades desarrolladas— por tener sociedades fragmentadas⁵ acicateadas desde el poder dominante para alejar a gran parte de la población de ese poder y afectar su propia capacidad de constitución de mayorías con aspiraciones de lograr hegemonía política.

Un proyecto de búsqueda de una sociedad moderna, alentada desde las universidades, tiene ante sí el dilema de modificar la dualidad que ha caracterizado a nuestras sociedades como parte de un plan de desarrollo de alcance nacional, en un contexto de democratización real.

Aprovechar las energías sociales de todos los sectores de la vida nacional, facilitando distintos niveles de participación, contribuiría a cementar un camino nada fácil pero indispensable para el futuro del país.



Nuestras sociedades no necesitan universidades napoleónicas⁶ sino verdaderas universidades que promuevan y contribuyan a la construcción de sociedades acordes con la realidad que se vive, apropiándose de la historia y las tendencias que se observan en el presente para crear derroteros de largo aliento.

Las universidades tienen el desafío imperecedero de no seguir perpetuando el subdesarrollo de nuestro país, sacrificando el valor humano de millones de personas; revertir esta tendencia desde los espacios académicos y proyectarlo a la sociedad, sería el gran aporte sustantivo que le pueden heredar a la población del nuevo milenio. La universidad no está al servicio del stablishment sino de la colectividad y su pluralidad de expresiones, está comprometida con los intereses generales, ejerciendo su función crítica a través del conocimiento y la reflexión.

Las universidades deben crear un espacio de intermediación entre el Estado y la sociedad, buscando conjuntar necesidades compartidas entre ambos para ser plasmadas en políticas de Estado de compromiso social, en el marco de un proyecto de sociedad en la que todos sean beneficiados. Frente al rezago social secular que caracteriza a nuestra sociedad, las universidades pueden ser colaboradoras para diseñar políticas sociales de gran envergadura, tratando de combinar ciencia y técnica al servicio de la comunidad. Esto implica obviamente una apertura de parte del gobierno para permitir una participación de las universidades en las decisiones gubernamentales; si no hay voluntad ni espacio para las universidades, el país seguirá preso de las decisiones unilaterales del gabinete de gobierno y sus asesores, postrando las esperanzas más sentidas de la población. No se está exigiendo intervención en las políticas diseñadas por el gobierno, sino más bien dar una apertura a las universidades para que puedan ilustrar y ponderar al gobierno de los efectos negativos y positivos de sus políticas estatales. Y aunque esto puede ser contranatura para los fines del gobierno, las universidades están con la obligación moral de aportar soluciones realistas a los problemas del país en

todos sus aspectos.

Entorno ISSN: 2218-3345

Enero 2000, N°.11



5. AGENTE PROPOSITIVO DE ALTERNATIVAS VIABLES PARA LA SOCIEDAD

Abordar nuevos retos para una convivencia social no sólo es un reto para las universidades sino una imperiosa tarea para ofrecer a la sociedad propuestas realistas a sus necesidades. Proponer alternativas para el desarrollo dentro de un proyecto de nación, puede granjearle beneficios a los centros de educación superior pues asumen como propios los problemas del país y ofrecen soluciones a los mismos.

Realizar un diagnóstico de todos los ámbitos de la sociedad, identificando principalmente los déficit que han marcado y caracterizado a la misma, puede ser un instrumento para generar una propuesta sensata y responsable de cara al futuro del país. Atacar los déficits en el ámbito social, económico y político desembocaría en un aporte fundamental de parte de las universidades, completando de esta manera dos esfuerzos ya realizados en el país: el gubernamental "Bases para un Plan de Nación" elaborado por la Comisión para el Desarrollo Nacional y el realizado por el PNUD acerca "Un proyecto de Nación". Se trataría de conjuntar esfuerzos dispersos en uno sólo, para tener solamente un documento que trace los lineamientos que necesita el país para lograr el desarrollo, la democracia y una paz social duraderas. Tener voluntad política de asumir como plan de gobierno ese resultado conjunto, podría ser esperanzador para la sociedad en su conjunto.

Las universidades son el arquetipo indispensable para proponer las soluciones más adecuadas que necesita el país, aunque no las únicas en el medio; sin embargo, su aporte puede ser valioso para el andamiaje institucional y real que demanda la población de los centros de educación superior.

Una propuesta realista debe considerar las factores internos y externos en los que se desarrollan las sociedades, a fin de robustecer los puntos débiles y potenciar aquellos en los que se puede progresar y beneficiar

Entorno ISSN: 2218-3345 Enero 2000, N°.11

frente a las condiciones externas. No es necesario crear espejismos sobre la realidad económica, social, política y cultural, porque puede ser dañino para el país y poco ético ante los compromisos e intereses generalizados.

- 1 Nos referimos a la propuesta hecha a la medida de Europa por el Primer Ministro británico Tony Blair y el socialdemócrata alemán Gerhard Schröder, teniendo como intelectual de cabecera al sociólogo inglés Anthony Giddens.
- 2 Ver Souza, Luis González, "¿Por qué México está cerca de quedarse sin futuro?", en La Jornada, México, 28 de agosto de 1999.
- 3 Esta era la idea confesional de los ideales comunistas, convertida en la práctica en una conducta verticalista incondicional y acrítica exigida como subordinación a todos los sectores afines a los partidos con esa ideología.
- 4 Cfr. De Azcárraga, José A., "Ciencia y universidad: una asignatura pendiente", en El País, OPINIÓN, España, jueves 15 de julio de 1999.
- 5 Cfr. Lucas Barbin, "La sociedad fragmentada", Nueva Sociedad, No. 111, Caracas, enero-febrero de 1991, pp. 100-108. Este artículo se entrego de parte del autor como seudónimo, nunca se reveló el nombre propio debido a la pérdida de los datos.
- 6 Véase Michelena, Héctor Silva y Sonntag, Heinz Rudolf, "Universidad, dependencia y revolución", Siglo XXI Editores, 10^a. ed., 1986, México, p. 21-22.